

**MANOLO VELA (COMP.), GUATEMALA: LA INFINITA  
HISTORIA DE LAS RESISTENCIAS, GUATEMALA, SEPAZ,  
2011<sup>1</sup>**

Rodrigo J. Véliz

El texto que se reseña es una contribución significativa al conocimiento de la historia reciente de Guatemala. Y se habla del conocimiento de la historia del país en dos sentidos. Primero, como memoria política, ya que de él pueden desprenderse elementos que colaboren a los necesarios debates políticos sobre qué significó la derrota revolucionaria de 1978-1982. Especialmente a las izquierdas, institucionales y sociales en toda su diversidad, que desde esa coyuntura se hallan en estado disperso, cuasi-existencial, y sin un norte político claro que defina un futuro común, de base y democrático, por medio de estrategias concretas y bien definidas.

Y también lo es como aporte académico, que de ninguna manera excluye su carácter político, pero sí define una amplia gama de temas a profundizar. El carácter bélico del conflicto guatemalteco hacía que la información básica y generalizada fuera compartimentada en pocos espacios, ocasionando así un conocimiento de carácter fragmentado y basado principalmente en impresiones a partir de la experiencia personal. Lo que en este texto quisiéramos realizar es precisar algunos de los aportes del libro (que, de alguna manera, son esperados por la misma naturaleza de la compilación y la situación en la que se enmarca), para después colaborar, siquiera mínimamente, en algunos espacios que permiten aportar algunas reflexiones.

El primer aporte es claro, y se refiere al tema de la noción de *víctimas* que después de la paz se implantó sobre las experiencias de las personas

ubicadas en las áreas donde la represión fue más violenta y masiva. Si bien las cuestiones jurídicas, importantes para el juicio de los perpetradores de uno de los momentos más trágicos en la historia latinoamericana, necesitaban recalcar el carácter civil, no armado, de la población, la experiencia que se vivió en esos años no se puede reducir a la violencia, por fuerte que haya sido su impacto. Más bien, el texto permite entender todas las determinaciones sociales y la riqueza de vivencias, producto de las variadas formas de organización por modificar la realidad. Replanteando el tema, las *víctimas* recobran en el análisis parte sustancial de su experiencia y memoria colectiva como histórico actor político.

Al mismo tiempo, se aporta al costoso entierro del eterno debate acerca de la instrumentalización de los “indígenas” por parte de “la guerrilla”;<sup>2</sup> un debate surgido de manera tendenciosa en la década de los noventa, que tenía como principal debilidad lógica e histórica el prejuicio de considerar a los sectores maya-indígenas como sujetos pasivos de la realidad de la que son parte. Una significativa cantidad de los textos que se conoce sobre el periodo se reducen a las memorias de combatientes y del alto mando de las organizaciones guerrilleras narrando el proceso desde el lugar que ocupaban, por un lado, y de los relatos sobre lo ocurrido en los momentos en que el ejército realizaba las masacres, cuyas consecuencias ya hemos mencionado. De ellos resulta complicado refutar a cabalidad la supuesta pasividad maya-indígena. La compilación, al contrario, nos permite ver diferentes experiencias locales en donde es posible divisar cuáles fueron las estrategias locales después de valorar las opciones sobre el carácter de su vinculación, si la hubo, con las organizaciones guerrilleras.<sup>3</sup>

Uno de los mayores aportes de la compilación es que nos muestra, a través de sus diferentes casos, la complejidad del intento de levantamiento a nivel nacional en lo que a nivel centroamericano se conoce como la Crisis del 79. Si bien hasta ahora se tenía conocimiento disperso acerca de la complejidad y diversidad de situaciones durante el periodo, es por primera vez que se cuenta con un texto que presente, si bien no de manera orgánica y articulada, sí una parte significativa de las diferentes regiones donde más actividad política hubo. Al contrario de lo que se tiende a enfatizar, la agudeza de la lucha no se redujo a la actividad de las guerrillas en el

área maya-occidental. La complejidad nos presenta las sustanciales diferencias en la constitución histórica de las clases subalternas del país, que incluye toda una serie de experiencias de clase, diferenciadas de acuerdo al espacio y papel social que se les trataba de imponer. Esta variedad en la constitución social de las clases subalternas debe ser entendida, en primer término, a partir del espacio –geográfico a la vez que social– que ocupaban en la articulación histórica de las relaciones entre clases y sectores. Articulación cuyo desenvolvimiento se hacía a partir de la vinculación específica de la producción agroexportadora –y su respectiva organización interna del trabajo– con el capitalismo mundial, especialmente de manera muy estrecha con el norteamericano a partir de la posguerra y 1954. Encontramos los diversos casos de la organización de los colonos campesinos en el Petén, de los diferentes sectores urbanos en las movilizaciones de 1978, la organización en el área ixil, la de los diferentes trabajadores de la agroexportación en San Marcos, la masiva huelga en la costa sur en 1980, las movilizaciones comunitarias en Huehuetenango y San Martín Jilotepeque, documentos sobre el Comité de Unidad Campesina, hasta las primeras luchas por la aparición de los desaparecidos con el Grupo de Apoyo Mutuo. Las experiencias que se nutren de ese proceso histórico constitutivo se sintetizaron en tradiciones de lucha como elemento de una cultura de clase. Imbuidos en estas disposiciones históricas plantean estrategias y programas, que si bien no están plasmados abstractamente en documentos, pueden rastrearse a partir de las decisiones colectivas que se van tomando en la dinámica de su historia y las diferentes coyunturas que presentan. Y fue, pese a esta diversidad histórica y fragmentación (o debido a ella), que se buscó articularse orgánicamente para tener un mayor peso y lograr cambiar sustancialmente la realidad de marginación, esa sí compartida, que se vivía.

Un pequeño agujero de la compilación, sin embargo, es obviar un argumento que permita entender la dinámica del proceso social más amplio que desembocó en la importante coyuntura de fines de la década de los setenta e inicios de los ochenta. De otra manera, sin este estudio más amplio que aglutine a los diferentes estudios de caso, puede caerse en un entendimiento, primero, de las regiones entendidas más o menos de

manera autónoma al resto<sup>4</sup> o, segundo, a la coyuntura como un estudio que se acaba en sí mismo. Al contrario, creemos que tanto los estudios regionales y locales, así como las coyunturas, sólo adquieren sentido si se les logra engarzar de manera orgánica con el proceso total más amplio que los define. Desmenuzando cada uno, el estudio de las regiones no tiene una historia aislada del resto de la dinámica nacional en su vinculación con lo internacional. Es necesario precisar cómo ha sido históricamente constituida una determinada región a partir del papel que pasaba a jugar dentro de la articulación de relaciones sociales, productivas y políticas, entre clases. Ésta es mejor definida a partir de la dinámica que era propia de la agroexportación cafetalera, que al final de cuentas marcó el ritmo de la articulación nacional de las regiones desde fines del siglo XIX. Para el caso de Escuintla en la costa sur –con la huelga de 1980 (Foster: 573-613)–, por ejemplo, debe entenderse primero como un espacio constituido a partir del enclave bananero que le daba un carácter más autónomo del resto de la economía que el que le iría a imprimir posteriormente la diversificación de la agroproducción con los cultivos del azúcar y el algodón a partir de la décadas de los cincuenta y sesenta. En estos años, otros espacios como el oriente del país y Chimaltenango pasaron vincularse como espacios de provisión, en migraciones o de manera temporal, de mano de obra para la producción, mientras sus fisonomías, principalmente la de Escuintla, cambiaban al convertirse en regiones de residencia de mano de obra asalariada de bajo costo, con mínimas parcelas para el sustento. La explotación, las condiciones de la producción y los bajos salarios que significaron la universalización del salario en la costa, ya diferente a la permanencia de relaciones serviles de colonato en la mayoría de las regiones maya-indígenas, en especial Alta Verapaz y el Quiché, fueron el sostén de la principal forma de producción/exportación del país. La masiva demostración con la huelga de 1980 fue la expresión organizada más fuerte que ha tenido el campo desde 1954 en contra de la histórica explotación de los brazos rurales.

Y las coyunturas, por su lado, no se dan en el aire, sino que son parte de un desarrollo de determinados procesos históricos, en donde las relaciones sociales entre clases dan lugar a contradicciones cuya vivencia

hace que se vayan tensando cada vez más y que desemboquen, ahora sí, en una coyuntura crítica donde los puntos de tensión pasan a definirse y quebrarse. Con esto queremos plantear la centralidad que debe tener el análisis en entender cada uno de los momentos de lo social como un instante de un proceso orgánico de más largo alcance; en otras palabras, entender los diferentes momentos como parte de una totalidad que les da sentido, y que no se reduce a lo doméstico nacional, sino que se define de manera más acabada junto a los particulares lazos que se establecen con el capitalismo mundial en diferentes momentos. Y en este punto nos gustaría precisar cómo interpretamos ese proceso más amplio que se definió en los años de la crisis total en los últimos años de la larga dictadura militar.

Lo central para entender esos años es la cuestión de la crisis del Estado oligárquico, que inevitablemente nos remite, como tantas cosas en la historia guatemalteca, a 1944. En ese histórico levantamiento se irían a plantear las problemáticas fundamentales que había profundizado la forma finquera de organizar el poder y las relaciones entre clases, cuyo intento de resolución subalterna se planteó en dos momentos desde el punto de vista nacional, en 1949-1954 y, menos definido, en 1978-1982. El primer momento presentó la única oportunidad en que se logró una articulación de diferentes clases subalternas, rurales y urbanas, a partir de una densa red de federaciones obreras y campesinas, organizaciones de base, comités agrarios respaldados por la institucionalidad agraria, y con la dirigencia efectiva y arrasadora, según quedó demostrado en sus años más álgidos, de Arbenz y lo que Gleijeses llamó su *kitchen cabinet* al referirse a la militante dirigencia del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT, comunista). Los años de movilización permitieron una profundización a la crisis abierta en 1944 al mismo tiempo que planteaban una respuesta a ella con la aglutinación en un proyecto que, más allá de los motes que le asignemos, buscaba desde diferentes perspectivas subalternas modificar el papel histórico al que se les había asignado en la sociedad liberal-oligárquica. Sus manifestaciones fueron múltiples y en diferentes sentidos, desde la confrontación directa y el cuestionamiento abierto a las categorías serviles en el campo, hasta el antiimperialismo feroz de los sectores medios radicalizados que se expresaban en los partidos políticos *octubristas*. En todos es posible

ubicar soluciones reales a los elementos más importantes que la crisis de 1944 había planteado. El correlato obvio, en lo doméstico, había sido la marginación real en la toma de decisiones estatales por parte de los sectores conservadores y las familias oligárquicas, ante la negativa de éstas de cambiar al ritmo del Estado revolucionario. Un profundo miedo acompañó al deterioro de ese “mundo” al que habían estado acostumbrados a vivir por tantos años, que terminó expresándose, convenientemente, como anticomunismo. Sobre la respuesta oligárquica, bajo el significativo peso del imperio, no necesitamos profundizar. Mucho se ha dicho al respecto. Para la exposición del argumento, lo que nos gustaría resaltar es que el quiebre del Estado revolucionario volvió a traer a luz las mismas problemáticas de 1944, ahora con la experiencia de diez valiosos años de organización. En otros términos, tras la intervención norteamericana y el fin del reparto agrario, la nueva correlación de fuerzas le planteó al gobierno contrarrevolucionario la tarea de lidiar con las nuevas dinámicas y tensiones que dejó planteado el proceso revolucionario como solución a la crisis histórica del liberalismo oligárquico. Ese momento estableció dificultades que la dominación histórica de clase –en términos generales– debía asumir para poder reproducirse.

Como es sabido, la década de 1954 a 1963 se caracteriza en el campo por una intensificación del poder gamonal –regional y servil en su constitución, por excelencia– y en la ciudad por un fuerte caos lleno de movilización y clandestinidad, con la miopía y el carácter violento que comenzaba a caracterizar a las formas políticas que siguieron a la revolución. Estas tensiones culminaron con el cierre tajante de espacios con el golpe de marzo de 1963. La dictadura militar fue, de esta manera, la solución conservadora que se planteó para resolver (o ahogar) la crisis oligárquica. Y este cierre político de espacios fue acompañado por la reorganización productiva a partir del mismo patrón de concentración/marginación-explotación con la diversificación de la agroexportación y la industrialización regional destinada, en parte, al consumo ciudadano para los sectores medios acomodados y los propietarios. La tendencia histórica fue a profundizar la alianza militares-oligarquía/Imperio, que se expresó en una articulación cada vez más fuerte entre la organización interna

como apéndice de la organización imperial en diferentes niveles, tanto en cuanto a la producción e intercambio de productos como en los planes geopolítico-militares. El carácter del proceso que tomó la industrialización y la diversificación agroexportadora, y luego la dictadura militar, sellaron una relación entre Estado y clases subalternas, expresado en el quiebre horizontal de la organización del poder.

La leve adaptación de la forma oligárquica y la vinculación con el capital norteamericano no lograron, como era obvio, solucionar los problemas que al interior producía esa forma de organizar el trabajo, la producción y el poder. Mientras se desvanecían los soportes financieros y comerciales de la producción con el impacto de la crisis petrolera y con eso, aún más, los magros beneficios que recaían a las clases subalternas, una nueva crisis estallaba a nivel nacional a fines de los setenta. En esos años estaba en juego, se podría decir a fuerza de precisar posteriormente, otra vez 1944 y 1954 como expresión histórica de una crisis del Estado en su conjunto –no restringido al aparato estatal–, como solía llamar a estos momentos aquel reconocido comunista italiano encarcelado por el fascismo.

Pero esa crisis se manifestaba de manera muy diferente en el campo y en la ciudad, lo que a su vez le proveía dinámicas muy propias y marcaba dificultades históricas al momento de plantear las alianzas nacionales para solucionar la fragmentación a través de algún tipo de dirigencia. De manera general, podemos decir que la forma agroexportadora/servil de organizar el país construía regiones rurales caracterizadas por el mencionado poder gamonal mientras sus lazos con el mercado mundial generaban la necesidad de una serie de servicios y agencias comerciales y financieras en la ciudad que, acompañadas del núcleo del aparato estatal, le imprimían a ésta una dinámica de carácter más moderno. Esta diferencia tuvo la tendencia de irse profundizando mientras la ciudad modificaba su fisonomía –y con eso a los grupos que en ella habitaban, que fueron acostumbrándose a exigir derechos e igualdad política– y el ritmo de la agroexportación condenaba al agro al inmovilismo dentro de un océano de precariedad. Como se ha dicho, la coyuntura en que se radicaliza la revolución guatemalteca planteó un primer intento de unificación orgánica entre las variadas clases subalternas rurales y las ciudadinas, bajo una

dirigencia explícita de parte de los sectores medios radicalizados en su postura antioligárquica y nacionalista. El surgimiento de esta dirigencia se beneficiaba por el control que ejercían en lo interno del aparato estatal y el plan concreto que venía a tocar el nervio fundamental de la problemática del país con el reparto agrario. Y del otro lado, ese programa revolucionario encontró una respuesta, ya que la presencia estatal en cualquiera de sus expresiones –con elecciones municipales, educación y aún más con la institucionalidad agraria– permitía a las organizaciones locales rurales cambiar significativamente las correlaciones de fuerzas en lo rural, sacándolos del aislamiento al que los condenaba el gamonalismo. La crisis en el agro se expresó de manera explícita desde las primeras cosechas de 1945 (cf. Gutiérrez) y tuvo diferentes explosiones locales hasta que el programa revolucionario permitió dar el paso hacia la articulación a nivel nacional.

Pero el carácter de esa articulación, en donde la dirigencia estatal y social ciudadina llevaba una clara batuta, y sobre todo el poco tiempo de la movilización, no permitió el surgimiento de una dirigencia y un programa propios de las clases rurales, pese a los brotes que se observan en el periodo. El tema de la capacidad y el carácter de una dirigencia subalterna rural es recurrente en la historia latinoamericana, y ha tenido diferentes expresiones a lo largo de su historia. Mariátegui, el histórico revolucionario peruano, menciona el tema al momento de tratar el potencial socialista de los *ayllus* peruanos. En su exposición surge el debate acerca de la capacidad de las comunidades indígenas de plantear una solución a sus problemáticas desde un punto de vista regional o hacerlo, a partir del partido socialista que había construido Mariátegui luego de romper con el APRA de Haya de la Torre, a manera nacional. El mismo problema puede ubicarse en las tensiones que se presentan en el proceso boliviano actual. En él, es posible ver que ciertos sectores indígenas y campesinos buscan realizar modificaciones a partir de un mando centralizado que le otorgue cuotas de autonomía a lo regional; y por otro lado, puede encontrarse sectores del mismo origen que exigen una autonomía total frente al Estado central, aunque éste, en la actualidad, esté a cargo del MAS de Evo Morales. Más cercano a nuestra región, el problema fue visto de manera nítida en la Revolución mexicana, donde surgió una dirigencia netamente campesina

que puso en jaque tanto a los ejércitos oligárquicos como a los constitucionalistas de Carranza y Obregón. Fue tal su empuje que lograron tomar a la ciudad de México sin disparar ni un tiro. Pero fue tal el carácter de su dirigencia, que no concebía lo nacional sino que se anclaba en lo regional, que tras unas semanas abandonaron la ciudad, dejándole el control del Estado a la Convención, donde los sectores medios radicalizados llevaban una batuta de un claro menor talante.

El caso guatemalteco parece no poder definirse aún, aunque a primera vista muestra una tendencia hacia lo nacional y el apareamiento de pocas dirigencias rurales autónomas. Pero todavía no se sabe a profundidad las perspectivas comunitarias sobre el momento y las tensiones que éstas entrañaron en su relación con las guerrillas. En todo caso, sabemos que la desarticulación campo/ciudad en 1954 vino a fragmentar nuevamente a los sectores rurales y urbanos en lucha. Y la tendencia a profundizar las relaciones serviles en el campo ayudó aún más a limitar la capacidad de movimiento y organización rural. No es posible encontrar por décadas una organización surgida desde lo local con alcance nacional, aunque sí organizaciones y sindicatos locales, actuando muchas veces en la clandestinidad. Tuvo que ser en los espacios donde menos se expresaba el poder gamonal y donde la intersubjetividad servil entraba en mayor erosión, las comunidades indígenas,<sup>5</sup> donde iría a surgir la primera organización autónoma campesina e indígena con el Comité de Unidad Campesina hasta los años setenta, que logró catalizar muchos descontentos más allá de su lugar de surgimiento hasta vincularse a una de las guerrillas, primero orgánica y clandestinamente, y luego militarmente en la segunda mitad de 1982.

En la ciudad el proceso tomó un ritmo muy propio y vino a expresarse en fuertes tensiones ante el cierre de espacios y el arrebato de los derechos conquistados. Mientras en el campo la reivindicación principal es, hasta hoy, la tierra, en la ciudad los sectores desplazados con la intervención exigían democracia y esos derechos perdidos con el fin de los cambios políticos que propiciaba la Revolución. Las continuas tensiones tuvieron brotes de insurrección en dos momentos, en 1962 y en 1978. En ambos casos la explosión fue espontánea y sin una eficaz dirigencia, no logrando concretarse en un derrocamiento como sí se logró en 1920 y 1944. A esto

se suma el desmantelamiento de las guerrillas urbanas en 1981 –que no eran fuertes en cuanto a su organizado arraigo popular–. En las dos últimas oportunidades, ningún arma fue entregada. Las acciones de 1981 imposibilitaron esto aún más. La ciudad explotaba en esas ocasiones a partir de dinámicas propias y sin articulación con el campo, y sobre todo sin una visible dirigencia que aglutinara y definiera el camino a seguir, ni a nivel de la ciudad ni mucho menos en lo nacional.<sup>6</sup> A nivel nacional parece que lo más cercano a una dirigencia se puede observar en algunas organizaciones guerrilleras, una de las cuales constituyó una articulación, llena de tensiones, entre sindicatos, organizaciones y bases campesinas. Esta falta de sincronía<sup>7</sup> entre lo que pasaba en el campo y la ciudad explica, en parte, la derrota política y militar del proyecto revolucionario en la crisis de los setenta y ochenta.

No se pudo constituir, como en la década revolucionaria, una articulación unificada entre los dos espacios, cayendo en la replicación de esfuerzos y la dispersión en momentos que exigían una férrea unidad y, sobre todo, claridad de la situación llena de incertidumbre debido a la generalizada crisis que se tenía en frente; situación que parece que sí tuvo más claro el ejército. Y esto explica la derrota de manera más acabada. La dirigencia que fue cayendo en las organizaciones guerrilleras –y que ellos demandaban como autoproclamada vanguardia– no logró, al contrario del FMLN y el FSLN, pese a que el campo ardía en llamas, pasar organizadamente a un asalto real del poder. Sus estructuras dictaron el carácter de su dirigencia, al plantear jerarquías a las que sus aliados debían someterse subordinadamente. Pero llegado el momento de máxima tensión, las respuestas prácticas necesarias no fueron las acertadas. Lo que la compilación deja ver, en algún sentido, es cierta desorganización subalterna dentro de una explícita rebelión en un momento de crisis aguda. Es obvio que la saña de la violencia estatal colaboró con la derrota, pero no la explica en su totalidad. Allí hay un debate político que todavía falta dar. Y también problemas sociales históricos, como hemos querido mostrar en este texto, que aún merecen respuestas y cambios a profundidad.

## NOTAS

<sup>1</sup> Agradezco profundamente a Marta Gutiérrez por hacer una revisión bastante crítica de versiones anteriores a este texto.

<sup>2</sup> El debate es traído a luz de manera explícita en el capítulo de Laura Hurtado (31-72), a partir de las luchas en una de las regiones del departamento de Huehuetenango.

<sup>3</sup> El debate, en los momentos en que sube un militar de nuevo a la Presidencia de la República y que militares de altos rangos comienzan a ser juzgados por actos de lesa humanidad, surge de nuevo bajo la forma de la *teoría de los dos demonios*, que busca equiparar la guerra civil con una carnicería entre dos opacas élites políticas. Estas simplificaciones históricas pretenden desviar la vista de los problemas fundamentales, a nuestro parecer, las razones por las que una parte de la población decidió tomar las armas (o apoyar de diferentes maneras a los que lo hacían): la dictadura militar como cierre prolongado de espacios dentro de condiciones de expresa explotación, a la par de la marginación de grandes contingentes de la población hacia los beneficios que la agroexportación y la industrialización regional dejaban.

<sup>4</sup> Aunque es necesario anotar que nuestra histórica organización servil del trabajo ha tenido como una de sus consecuencias más conspicuas la existencia dispersa del poder, que se caracteriza, como tan bien lo mostró Mariátegui en su análisis del Perú, por cierta autonomía de las regiones controlados por el poder gamonal –conocido en Guatemala como poder finquero–. Aunque esto no niega que estas regiones se conformasen como tales a partir de su vinculación con la producción y comercio internacional y a partir de los límites y su relación con el Estado central.

<sup>5</sup> Como queda claro en los textos que se refieren a las comunidades indígenas, y en eso la antropología fue la primera en mostrarlo, Acción Católica jugó un papel histórico como nuevo espacio que vino a llenar expectativas de nuevas generaciones y sectores que ya no se veían reflejados en las estructuras tradicionales de las cofradías.

<sup>6</sup> Cabe decir también que después de 1978 no se volvió a dar una movilización masiva en la ciudad capital, en parte debido a la desarticulación que la siguió, pero también por los derechos devueltos con la “transición a la democracia” comenzada en 1984. Esto explica también que lo más cercano a una masiva movilización se

haya dado con el *Serranazo* de 1993, que violaba la Constitución democrática. El campo, sin embargo, no ha resuelto aún la crisis que lo constituye, con sus respectivos, pero mínimos cambios en su forma, desde 1944.

<sup>7</sup> La idea la plantea, oportunamente, Sáenz de Tejada en su colaboración en la exposición de las batallas campales de 1978.